



La verdadera frontera comienza justo después del abandono del Estado

Luis Carlos Díaz V. *

Venezuela comparte con Colombia una frontera caliente, una larga línea de 2.219 km de largo que más que división, representa un terreno común para los que hacen vida en sus aleros. No hace falta cruzar una alambrada o un muro, ni buscar una garrocha para pisar suelo colombiano o venir a Venezuela. No en el estado Apure, por ejemplo, territorio en constante movimiento migratorio, económico y cultural.

Sin embargo es una situación compleja la fronteriza, donde la pobreza, la violencia armada y el abandono durante mucho tiempo del Estado, de ambos estados, ha desencadenado una dinámica caótica en donde la ley o la justicia se toman paréntesis a cada respiro.

En una lucha por el control territorial, que también significa control de lo que se pueda traficar por allí, muchas poblaciones rurales de Colombia han sufrido las constantes barridas de grupos armados irregulares. Cuando no fue el ELN, fueron las FARC, alguna división de éstas, un grupo paramilitar pagado por la extrema derecha o las propias fuerzas armadas oficiales de Colombia. Las balas mil veces han caído sobre los inocentes por considerarlos sospechosos. Por eso el terror no diferencia y el temor produce la estampida.

Es la historia de décadas de guerra colombiana, un conflicto que pese a la cercanía a nuestras fronteras, nunca ha sido comprendido por los venezolanos, que lo perciben

Así es la historia de El Nula, cuya "fundación" y crecimiento se debe a una de las primeras oleadas de campesinos colombianos que cruzaron la frontera después del asesinato de Gaitán y el inicio de la violencia armada.

como un lejano rumor, ajeno por estar bajo otra bandera.

La realidad es otra. Porque no sólo en desplazados internos se convierten los colombianos víctimas del conflicto armado, también muchos, ya incontables hoy, han cruzado las distintas fronteras para reconstruir sus vidas en nuevos territorios.

Así es la historia de El Nula, cuya "fundación" y crecimiento se debe a una de las primeras oleadas de campesinos colombianos que cruzaron la frontera después del asesinato de Gaitán y el inicio de la violencia armada. Al final, no había mucha diferencia entre un habitante de aquel o éste lado del río, sobre todo si se dedicaba al cultivo o a la ganadería, porque los paisajes son los mismos. Así se consolidó un caserío que es ahora un pueblo de aproximadamente 10 mil personas y sigue presenciando estas avanzadas migratorias.

Pero ya no es la agricultura la actividad que predomina en esta tierra verde. Entrar a El Nula desde el aeropuerto de El Piñal, en el estado Táchira, significó en el pasado mes de marzo, pasar por 3 alcabalas militares. El operativo de seguridad para la zona, diseñado por el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, incluye estos detenciones en las vías más transitadas, petición de documentos de identidad y revisión de vehículos. Una vez en El Nula, los militares también son visibles en la estación de gasolina, donde controlan el suministro de combustible. El tráfico del mismo para revender del otro lado de la frontera es parte de los grandes rubros que sostienen a los grupos armados irregulares: tráfico de armas, drogas, ganado, combustible y jóvenes para la lucha armada.

EJE 1: VIOLENCIA

A dos cuadras de la custodiada estación de gasolina unos sujetos desconocidos asesinaron a un hombre en la estación de autobuses. Una vez ejecutado el acto, elevó a tres el número de homicidios en el mismo sitio en apenas 8 días. "Es la limpieza de los sicarios", exclamó una vecina de la zona entre dientes, "luego, aquí nadie vio nada ni sabe nada".

Los niños y niñas de El Nula hablan de esta gente asesinada como "la gente maluca", tan malucos como los mismos asesinos. Sólo que se matan entre ellos con la población civil en el medio. Es una situación compleja y dura la de la frontera, donde se convive con la violencia como elemento definidor de actitudes.

Resulta un secreto a voces que en esta zona apureña operan y se movilizan escuadrones organizados de las milicias irregulares colombianas. Tienen control sobre algunos territorios, o al menos tienen contactos e in-

formantes que les colaboren. Por eso la milicia venezolana no sabe a qué sombra se enfrenta, si una o un enjambre de ellas.

Para la gente en las calles de El Nula los nombres están claros, aunque entren en el mismo saco del rechazo o el silencio: *bolillos* o *boliches* son los miembros de la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL), grupo venezolano que se mantiene de la extorsión y el secuestro mientras plantea un discurso revolucionario y de apoyo al presidente Chávez, al que denominan "comandante de la esperanza"; fueron invitados por el propio Presidente en una alocución en Apure a deponer las armas, porque son considerados por el Estado venezolano como delincuentes.

Faracos o *farruchos* son los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera más grande y mejor articulada de las que operan en Colombia. Tienen más de 40 años de existencia y se estima que la integren alrededor de 16 mil combatientes en distintas regiones y frentes del país. Se financian del narcotráfico, los cultivos ilícitos y el secuestro.

Elenos llaman a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que cuenta en la actualidad con aproximadamente 4 mil miembros con mayor presencia en los departamentos del norte de Colombia como Arauca, Antioquia, Bolívar, Santander y Norte de Santander, zonas aledañas y fronterizas con nuestro país. Tanto el ELN como las FARC no han tenido miramientos a la hora de atacar a las poblaciones civiles que consideren dan apoyo al grupo contrario. Las escaladas de violencia entre ambos grupos, sumado a los distintos frentes disidentes que se han separado y desconocen la autoridad de algún comandante guerrillero, no ha hecho más que recalentar la zona.

Paracos o *Paras* denominan a los grupos paramilitares, de exterminio o escuadrones de la muerte creados hace más de 20 años para la protección de terratenientes, políticos y líderes narcotraficantes que pudiesen estar en la lista de secuestrables para las guerrillas. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) podrían tener a 8 mil efectivos activos operando en el país, y en nombre de la protección o la liberación del control guerrillero han asesinado, torturado, desaparecido y desplazado comunidades bajo la acusación de colaborar con los otros grupos irregulares. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos en el vecino país reconocen que estos grupos han sido utilizados para cumplir las funciones de las Fuerzas Armadas colombianas en enfrentamientos contra las guerrillas.



...los periodistas foráneos son vistos como seres extraños con capacidad para causar más problemas de los que solucionan. Una palabra mal puesta, una cita mal atribuida en la prensa y alguien podría ser víctima del siguiente asesinato.

Así que no lo tienen fácil los militares venezolanos al movilizarse por terrenos en los que no están duchos y en condiciones de combate favorables para los experimentados guerrilleros. Por eso la desconfianza y la constante referencia a los Teatros de Operaciones ubicados por las FAN tanto en Apure como en Zulia.

Pese a esta situación de constante tensión, una señora de El Nula se ufana de que por allí “al menos no hay ladrones”, pues “¿quién se atrevería a robar en alguien sin saber qué grupo lo protege?”, insiste la señora. “Aquí no nos atracan como en Caracas, si el hampa se hace pasar por *guerrillos* para portarse mal, esos terminan muertos a los 15 días. Comprobado”.

Esa aparente tranquilidad se manifiesta de dos formas, ambas relativas a las comunicaciones. La primera fue al intentar hacer una llamada desde un celular alquilado en El Nula, frente a la iglesia. Antes de marcar el número la recomendación de un desconocido fue rápida y certera.

- “Cuidado con lo que dice, caraqueño, los teléfonos están pinchados”.

- “¿Pero por quién?”

- “Por todos, nunca se sabe”

Impresión de la llamada: *todo está bien en la zona*. La noticia fue confirmada por las declaraciones del general de división Carlos Briceño, quien dijo a la Agencia Bolivariana de Noticias que desplegarían una Unidad Especial de Guerra Electrónica para contraatacar el bloqueo y las distorsiones de las telecomunicaciones en Apure.

La segunda experiencia se repetiría tanto en El Nula como en Guasdalito, los periodistas foráneos son vistos como seres extraños

con capacidad para causar más problemas de los que solucionan. Una palabra mal puesta, una cita mal atribuida en la prensa y alguien podría ser víctima del siguiente asesinato. Por eso el silencio o la manifestación de desconocimiento son los recursos usados por la gente ante los reporteros que busquen indagar las historias de la frontera.

Ana Quilarque, periodista de Guasdalito y colaboradora del Servicio Jesuita a Refugiados, apunta que la cercanía a la gente y la convivencia con los problemas diarios son mejor fuente de información que el paracaidismo con grabador en mano. Eso es sentir la frontera en la piel, empaparse del otro, como hacen colombianos y venezolanos en su convivencia fusionada por décadas.

EJE 2: INMIGRACIÓN

En vista de las similitudes entre las zonas vecinas, los flujos históricos y el atractivo comercial, centenares de miles de colombianos han cruzado la frontera para asentarse en territorio venezolano. Esa ha sido la historia durante décadas de la migración económica. Mejores condiciones laborales o de atención médica producen la llegada de más colombianos. Todos esos casos deberían regularizarse en la Dirección de Extranjería (DIEX), como ordena la ley, para disminuir el descontrol de una zona de por sí dinámica.

Sin embargo hay otro tipo de razones que llevan a la gente, diríamos que la obliga, a cruzar la línea y quedarse a vivir en Venezuela: la búsqueda de paz.

Cualquier repunte del conflicto armado en Colombia, que ha generado más de 3 millones de desplazados internos corridos por el miedo y el terror de la violencia, tiene sus ecos en las líneas fronterizas de todos los costados del país. Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela ven pasar por sus fronteras constantes flujos de refugiados de la guerra desde hace décadas, cuando empezó el terror hoy devenido en industria de la muerte.

El mismo miedo a declarar o ser identificado que siente la gente, lo tienen los inmigrantes al momento de solicitar la condición de refugio. Según las leyes internacionales, el Estado debe garantizar la atención y protección de las personas que huyan de su país motivado a temores fundados de persecución. Como en la frontera se une el miedo a las guerrillas que puedan operar del lado venezolano con el parecer sospechoso ante las autoridades venezolanas, muchos colombianos optan por residir ilegalmente dentro del país y hacerse invisibles, sin solicitar ante la Comisión Nacional para Refugiados y Refugiadas la debida protección oficial.



“No sabemos quién está ingresando al país, así que debemos revisar muy bien, aquí me han llegado explosivistas que hacían morteros para las FARC o raspadores de coca a solicitar refugio, y eso no podemos permitirlo, los problemas de Colombia, que se queden allá”.

Eso genera cientos de episodios diarios en las muchas alcabalas de control apostadas en la región, donde retienen “en observación” a los sin-papeles e incluso a los que presentan los documentos de solicitud que están en proceso ante la Comisión. Incluso algunos han manifestado que fueron víctimas de maltratos al ser llevados al Teatro de Operaciones.

La oficina central está en Caracas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y para su trabajo en regiones sensibles crearon las secretarías en Apure (Guasdalito), Táchira y Zulia. Esas Secretarías Técnicas creadas en 2005 se encargan de recibir a los solicitantes y enviar sus peticiones a la capital. El Estado debe responder entonces en 90 días y otorgar o negar la condición de refugiada a la persona. Eso le permitirá circular por el territorio nacional sin restricciones ni temor a ser deportado.

Es aquí donde empiezan las labores de acompañamiento del Servicio Jesuita a Refugiados y otras organizaciones internacionales como el ACNUR y Cáritas. La Secretaría Técnica de Guasdalito está a 4 horas y varias alcabalas de El Nula, igual que otras instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Protección del niño, niña y adolescente y la alcaldía del Alto Apure.

La precariedad de las zonas rurales, así como la pobreza de muchos de sus habitantes, dificulta su traslado desde allí hasta Guasdalito. Hay potenciales solicitantes de refugio en caseríos que están a dos cruces de río y siete horas de camino de la oficina, y sólo los equipos rústicos de las ONG llegan hasta allá para brindar atención a estas personas.

Asimismo, una vez iniciada la solicitud ante el Estado venezolano, la Comisión exige en su documento la presentación mensual de los solicitantes ante la oficina, para sellar y confirmar su presencia en el país. Significa más movilizaciones a los centros de poder.

También, aunque la ley especifique que la Comisión debe responder en tres meses, los documentos de solicitud tienen espacio para ocho sellos mensuales, y según declaró Ronald Osorio, responsable de la Secretaría en Apure, algunos solicitantes han tenido que anexar otro documento para seguir sellando mensualmente su espera de respuesta.

También Osorio reconoce respetar la “perspectiva de género” a la hora de entrevistar a los y las solicitantes de refugio para elaborar los documentos: “Los formamos en cola fuera de la oficina y, si hay muchos, yo entrevisto a los hombres y las mujeres hablan con mi secretaria”. Un sistema que difiere de las metodologías del SJR, que se aproxima a grupos familiares, visita las casas y realiza varias entrevistas antes de formalizar un procedimiento de acompañamiento en la gestión de la solicitud.

La entrega de esos documentos provisionales depende también de la disponibilidad que tenga la oficina de Secretaría, que a veces sufre la escasez de materiales debido a los retardos de la DIEX para producirlo y enviarlo. Todos estos baches atentan contra el principio de celeridad, que debe primar en las solicitudes de refugio.

Desde Caracas, el director nacional de la Comisión para Refugiados, Ricardo Rincón, explicó que están trabajando desde 2003 y que deben laborar a dos tiempos, revisando las solicitudes que llegan pero sin olvidar las que están hechas desde antes de que existiera la comisión, creada por este gobierno para atender el problema. Hay registros de ingreso de solicitantes de refugio del año 1996-98, que siguen en proceso de revisión.

Rincón advierte que la característica caliente de la zona les hace tener que revisar las solicitudes de refugio con dos filtros, incluida la inteligencia militar, para evitar subversivos y guerrilleros desmovilizados entre los regularizados: “No sabemos quién está ingresando al país, así que debemos revisar muy bien, aquí me han llegado explosivistas que hacían morteros para las FARC o raspadores de coca a solicitar refugio, y eso no podemos permitirlo, los problemas de Colombia, que se queden allá”.

Las cifras generales de Caracas son que el 95% de los refugiados y solicitantes en Venezuela son colombianos, el resto son nigerianos, haitianos e irakíes, entre otros. Asimismo, alerta que entre los colombianos hay algunos del sur o del oeste, a cientos de kilómetros de la frontera y no de las regiones vecinas al país, lo que le hace sospechar que las condiciones económicas de Venezuela les pueden resultar más atractivas y por eso de-

“¿Cómo laborar por ellos si también toda la comunidad está afectada de grandes necesidades? Trabajar y apoyar a estas poblaciones pobres cuando los locales son igual de pobres es un problema”...

secha que algunos casos sean “temores fundados” lo que los haga salir de sus tierras.

Hasta abril la Comisión manejaba 723 solicitudes de refugio provenientes de Apure, que comprende a 2.113 personas. Porque las solicitudes se hacen por grupo familiar, excepto los hijos mayores de 18 años, que deben hacerlo individualmente. En total se contabilizan 2.664 solicitudes, de 6.644 personas ante las oficinas nacionales, una cifra mínima comparada a los flujos migratorios que han ingresado a Venezuela en los últimos años.

Rincón considera que el tiempo óptimo de respuesta es 5 meses, y que los demás casos de retraso se deben sólo a excepciones.

También insiste en saber diferenciar entre los posibles solicitantes de refugio y los migrantes económicos, aunque los conmina a todos a formalizar su situación ante organismos del Estado pues los papeles del SJR o el ACNUR no representan un aval jurídico de su condición, sino un apoyo previo a la formalización.

“Muchos de los refugiados son alentados por ONG a que tienen que exigir ante la comisión, entonces muchos llegan aquí con exigencias, subidas de tonos, amenazas... y nosotros no le paramos ni le hacemos caso, pero a veces provoca decirles que vayan allá, a Colombia, y le expliquen al presidente Uribe lo suyo, que vayan al Palacio de Nariño... pero sí vienen a protestar a Miraflores”, indicó Rincón. A lo que agregó que algunos solicitantes confunden al Estado con el ACNUR: “vienen y nos piden casa, acueductos, trabajo y comida. Pero un momentito, si ya tienen la condición y los mismos derechos que los demás, tienen entonces que tener las mismas necesidades que tenemos los vene-

zolanos”. Sin embargo el ánimo de reconstruir sus vidas da a la mayoría de los solicitantes de refugio fuerzas para levantar sus negocios de este lado de la línea, con apoyo de familiares u organismos de ayuda.

EJE 3: POBREZA

El abandono de ambos Estados en las zonas fronterizas, ha dejado a poblados como El Nula y caseríos aledaños fuera de los planes de desarrollo y mejora estructural del país. Incluso proyectos abortados como Ciudad Sucre, una construcción de 200 casas en calles empedradas y cuadrículas perfectas hecha por el segundo gobierno de Rafael Caldera, generan mayores problemas en la zona, porque aumentan las necesidades de los habitantes que llegan a estos nuevos techos concebidos sin la ejecución total de lo que estaba planificado.

La pobreza extrema es un problema estructural que afecta el escenario de atención a los solicitantes de refugio. “¿Cómo laborar por ellos si también toda la comunidad está afectada de grandes necesidades? Trabajar y apoyar a estas poblaciones pobres cuando los locales son igual de pobres es un problema”, se plantea la joven abogada Mary Carmen Iriarte, que lleva adelante algunos programas de formación junto a los equipos de Fe y Alegría y el SJR.

Actualmente trabajan en la prevención de la discriminación desde los salones de clases, donde todos los pequeños viven muy cerca el factor inmigratorio. Iriarte apuesta por la formación en la planificación de proyectos comunitarios que logren construir realmente comunidad, pues salvo el problema de



“Estamos incomunicados, como si esto no fuera Venezuela”, es una queja común de quienes ven en las comunicaciones una dimensión fundamental para superar algunos problemas estructurales.

Para el equipo del SJR, la medida gubernamental para aumentar el despliegue militar y armado en la zona no es una solución tan sólida como el fortalecimiento del tejido social.

documentación, el resto de las deficiencias son iguales en todos los habitantes del poblado. De esa forma el diálogo desde la necesidad permitiría buscar salidas alternativas a la escalada de violencia.

Otro problema es que Venezuela se percibe desde afuera como un país rico, un país que tiene las necesidades cubiertas e incluso colabora económicamente con otros países, es por eso que a las organizaciones no gubernamentales a veces se les dificulta recibir financiamiento de afuera. Porque para los organismos de cooperación internacional, esos problemas ya deberían estar resueltos y no en el nivel de precariedad en el que están.

“Estamos incomunicados, como si esto no fuera Venezuela”, es una queja común de quienes ven en las comunicaciones una dimensión fundamental para superar algunos problemas estructurales. Por ejemplo, el hecho de que no haya Internet, aunque parezca un lujo, limita las comunicaciones de la zona. Así, la Secretaría Técnica de Guasualito trabaja con un fax, y los jóvenes de El Nula que llevan adelante el Frente Francisco de Miranda y diversas misiones estatales sólo cuentan con sus teléfonos celulares y poco saldo. ¿Cómo avanzar en esta temática sin el apoyo de las telecomunicaciones del Estado? ¿Cómo articular las distintas organizaciones de la sociedad civil o las manifestaciones comunitarias con los centros de poder local (que están a 4 horas de carretera) y nacional?

Héctor Pinzón es uno de los coordinadores del Frente Francisco de Miranda, el grupo juvenil que administra las misiones Vuelvan Caras, Madres de Barrio, Revolución Energética y Moral y Luces. Las labores fueron asumidas después que otros organismos públicos no pudiesen mantenerlas. Pinzón advierte que de los 60 luchadores que fueron a estudiar en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, junto a chicos de Bolivia, Argentina y Nicaragua, sólo quedan 20 en las labores de El Nula.

No perciben un sueldo por sus servicios sino una dieta mínima que sólo cobró una vez, hace meses e incompleta: “Sin embargo, aunque no nos paguen, siempre cinco o seis estamos allí, porque el Presidente confía en nosotros. Somos promotores y activistas comunitarios. Bachilleres somos pocos, este año se están preparando seis. Y hemos hecho mucho, en Guasualito ni siquiera tienen sede. Nosotros sí porque la invadimos”. En esa sede tienen las cajas de bombillos que día a día cambian en las casas de la zona, y también motorizan las reuniones con los Consejos Comunales. Recuerda que su zona siempre estuvo excluida del país y que ahora les toca a ellos protagonizar su cambio a través del voluntariado.

El día a día de Pinzón y el Frente en la frontera es cubrir necesidades, cuando no es conseguir transporte, es la computadora, como ahora que no tienen dinero como para pagar el antivirus que la devuelva a la vida. No cuentan con las alcaldías porque mientras éstas se pelean entre ellas no ejecutan los planes enviados de la capital, “y si nos reunimos con un alcalde estamos seguros que nos estamos echando en contra a los que siguen al otro”. Dice sobre los conflictos solapados para la capital entre la alcaldía del municipio Páez, el municipio especial del Alto Apure, y de éstos con la gobernación de Apure.

Tachar los acontecimientos y las faltas del Estado como “conflictos políticos”, o fabricarlos para desviar la atención es una forma de desestimar un grave problema social, que en realidad es un conjunto.

Para el equipo del SJR, la medida gubernamental para aumentar el despliegue militar y armado en la zona no es una solución tan sólida como el fortalecimiento del tejido social. Y la parroquia administrada por Acacio Belandria afortunadamente no es la única que boga en esa dirección. Quizá el mayor reto se encuentre en fortalecer los lazos entre la comunidad y los pocos hilos que las instituciones del Estado tienen en la zona.

El poder comunal en la frontera es un tema que debe seguir levantando eco para ser replicado y adaptado a lo largo de la línea común entre los países, porque las acciones militares sólo dependen del recrudescimiento del conflicto entre guerrillas, pero las necesidades de los pobladores son diarias.

Para el padre José Villarroel, la política de seguridad fronteriza urgente “no es la seguridad militar, sino una seguridad humana, que implique garantizar una vida cultural, económica, social y familiar digna”.

Las apreciaciones entre la comunidad de El Nula es que cada día más venezolanos se han incorporado a los grupos irregulares. Ya las mujeres no son sólo colaboradoras sino que están tomando roles de combatientes de manera frontal. Asimismo, la proliferación de sicarios y milicianos menores de edad es un flagelo que rasga cualquier tratado de derechos humanos.

Palabras como “reclutamiento” aumentan el temor fundado por amenazas en las familias. Basta que se rueden bolas de reclutamiento de las FARC o el ELN para que haya éxodos de niños y niñas a poblados lejanos. Las autoridades nacionales no tienen cifras sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes porque es un fenómeno aún desconocido públicamente por ellos, debido a que es difícil de registrar y hacer seguimiento. Sólo se conocen los efectos y las víctimas. El



Un chico de la pastoral comentó que les podían ofrecer un millón de bolívares mensuales y un arma por unirse a los grupos irregulares, basta que la seducción ante la pobreza funcione para que muerdan el anzuelo y asistan voluntariamente a un campamento guerrillero.

problema es que más que un proceso *forzoso*, lo que rige es la elección *inducida*. Un chico de la pastoral comentó que les podían ofrecer un millón de bolívares mensuales y un arma por unirse a los grupos irregulares, basta que la seducción ante la pobreza funcione para que muerdan el anzuelo y asistan voluntariamente a un campamento guerrillero.

Los grupos armados han desconocido la existencia de menores de edad entre sus tropas, pero luego no tienen reparo en dejar sus cadáveres en los campos donde han librado combates. Aunque no todos los menores reclutados tienen un arma, la mayoría labora como informante o “mosca” en las calles o colabora con el tráfico de productos, por lo que resulta imposible identificarlos.

Para prevenir la vinculación de la niñez con estas fuerzas armadas irregulares, la pastoral juvenil se esfuerza por fortalecer áreas como la recreación-educación. Es el trabajo de Daniel Rodríguez con los más jóvenes, a quienes ayuda desde la parroquia con esta cruzada por mantenerlos sanos: “Si el Estado reconociera el flagelo, tuviésemos más seguridad para actuar, podríamos ser más solventes y públicos. Esos grupos tienen poder en la zona, incluso hay infiltrados también en el poder. Hoy mataron a alguien a dos cuadras de aquí y más adelante le piden a uno la cédula dos o tres veces cruzando una sola calle ¿es eso seguridad?”. Se pre-

gunta Rodríguez antes de seguir con su actividad de fin de semana, que incluye charlas y encuentros con los jóvenes del pueblo.

Insiste constantemente en contrarrestar la cultura de la muerte, que se ha convertido en un espectáculo: “Es ya normal que las mujeres salgan con sus bebés a ver muertos, ver la sangre que derrama el recién abatido en una acera con ellos en los brazos”.

“NO SE OLVIDEN DE NOSOTROS”

La mezcla de problemas es lo que genera esta percepción de territorio ajeno y ordenado bajo otras leyes. La guerrilla y el paramilitarismo se erigen como entes omnipresentes en la zona, “es que son hasta jueces de paz, funcionan como medios alternos para la resolución de conflictos”, ha declarado el párroco Acacio Belandria.

O como dijo un vecino cuando asesinaron al hombre en el terminal: “se fueron los militares y llegó la ley”. Y así como la Comisión hace un doble filtrado de los solicitantes de refugio, los militares venezolanos están sobre alertas y sospechando hasta el punto de la estigmatización de todo desconocido en territorio fronterizo.

Es el caso vivido por Leidy, la primera refugiada que en el Estado Apure consiguió el reconocimiento de su condición y le otorgaron la cédula de transeúnte. Tiene 22 años de edad, y desde que llegó en 2004 hasta este año, fue que recibió su documento de identidad. El resto de la familia, que llegó a Venezuela antes que ella, sigue a la espera. Leidy se topaba con las autoridades venezolanas en cada revisión de autobuses, en cada viaje a la escuela, donde era “retenida” por su condición de extranjera hasta que se confirmara la orden de algún superior para poder seguir su camino. A veces la orden llegaba después de que el autobús la había dejado.

Lo único que lamenta en la actualidad la joven que ya asiste a la Universidad es que una vez obtuvo el documento venezolano, ni de casualidad la han parado en una alca-bala, con el gusto que tiene por sonreír y demostrar que ya no es una sospechosa.

También paz en Venezuela ha conseguido Manuel J. Mara. Decidió cruzar la frontera después de que su hermano fuese asesinado hace 6 años por acompañar a un defensor de derechos humanos. Con un micro crédito de 700 mil bolívares montó una pequeña venta de dulces de guayaba y queso. Mientras vende por El Nula, prepara sus viajes a San Cristóbal para ver a su beba, nacida en Venezuela, que está hospitalizada por una operación.

La abogada del SJR, piensa que debe haber mayor insistencia en superar la debilidad de



“Es ya normal que las mujeres salgan con sus bebés a ver muertos, ver la sangre que derrama el recién abatido en una acera con ellos en los brazos”.

“No se olviden de nosotros”, dijo una anciana en la despedida de una entrevista, y nosotros empezamos a ser todos.

la falta de formación de la gente en su empoderamiento: “Nos falta motorizar el tema del liderazgo comunitario, el conocimiento de las leyes, la relación con organismos de gestión financiera, contraloría social, deberes y corresponsabilidades y la planificación conjunta entre los ciudadanos y las alcaldías”.

Entre la garantía de otros derechos fundamentales, la educación y la salud presentan algunos altibajos. Las escuelas bolivarianas reciben a todos los niños que se quieran incorporar al sistema de estudios, sin distinción ni exigencia de documentos. Sin embargo, los pequeños dependen de la transitividad de sus familias, que a veces se ven obligadas a ir como nómadas de pueblo en pueblo por temor a otra persecución.

Asimismo funcionan las unidades de atención médica de los cubanos, aunque están muy limitados para los casos difíciles, que deben ser remitidos a Táchira, que está más cerca de El Nula que el resto del estado Apure, difícil en geografía y dependiente de las temporadas de lluvias.

Sin embargo se necesita mayor celeridad de procesos para los jóvenes mayores de edad que cruzan la frontera con el bachillerato completo y desean seguir estudios universitarios. La imposibilidad de volver a su territorio a buscar los documentos certificados por temor a lo que ocurra allá, o a que le prohíban el ingreso, pone barreras en su continuidad educativa. Problema que atañe paralelamente a la Comisión de Refugiados, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Educación Superior e Interior y Justicia, y que por burocracia o vacíos se retrasa enormemente.

En ese sentido la invitación es a pensar la frontera desde la complejidad. Su liquidez y permeabilidad. Su dinámica caliente y codependiente por historia común. Su inevitable contacto con los grupos irregulares en la

zona, que han tomado el control décadas antes de que el Estado se diera cuenta. Pues casi todas las familias han tenido contacto de una u otra forma con algún grupo irregular, pero eso no los hace colaboradores ni cómplices sino víctimas del abandono.

Los irregulares se han erigido y se erigen como poder cuando no hay instituciones que medien una situación. La guerrilla ha servido de juez para procesos como las discusiones por tierras, ganados, temporadas de pesca o las desviaciones de los ríos. Así también tienen sus controles u observatorios sobre los flujos comerciales y de transporte en las zonas por donde se movilizan, ya que de ello depende el tráfico de drogas, ganado, armas, secuestrados, gasolina y demás bienes (o males) de su subsistencia.

El trabajo para combatirlos pasa por una labor de dignificación a los afectados y dignidad sobre el otro, sea sujeto político, irregular, armado, ganadero o campesino. Tendría mayor poder de convocatoria el diálogo que la sospecha. “No se olviden de nosotros”, dijo una anciana en la despedida de una entrevista, y *nosotros* empezamos a ser todos.

* Miembro del Consejo de Redacción

Nota: Algunos nombres han sido cambiados o generalizados para proteger a los entrevistados.